LIBRANZA, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE EMPLEADOR Y EMPLEADO

Concepto 2015109690-003 del 9 de diciembre de 2015

Síntesis: *El artículo 6° de la Ley 1527 de 2012, mediante la cual se estableció el marco general para la libranza o descuento directo, señala la obligación del empleador o entidad pagadora de efectuar los descuentos autorizados por los beneficiarios de los créditos y trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras correspondientes, precisando en el parágrafo 1° que: “Si el empleador o entidad pagadora no cumple con la obligación señalada en el presente artículo por motivos que le sean imputables, será solidariamente responsable por el pago de la obligación adquirida por el beneficiario del crédito”. Significa lo anterior que por ministerio de la ley el pagador está llamado a responder solidariamente por la satisfacción de la obligación adquirida por el deudor de la libranza, cuando con ocasión de sus propias acciones u omisiones y sin justificación, haya dado lugar a su incumplimiento.*

«(...) comunicación por medio de la cual consulta si la entidad pagadora en un crédito de libranza puede negociar con el banco o entidad operadora las condiciones para no responder solidariamente por el pago de un empleado, o si las normas que regulan la materia son de orden público.

Al respecto, procede señalar en primer lugar que el artículo 6° de la Ley 1527 de 2012, mediante la cual se estableció el marco general para la libranza o descuento directo, señala la obligación del empleador o entidad pagadora de efectuar los descuentos autorizados por los beneficiarios de los créditos y trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras correspondientes, precisando en el parágrafo 1° que: “Si el empleador o entidad pagadora no cumple con la obligación señalada en el presente artículo por motivos que le sean imputables, será solidariamente responsable por el pago de la obligación adquirida por el beneficiario del crédito”.

Significa lo anterior que por ministerio de la ley el pagador está llamado a responder solidariamente por la satisfacción de la obligación adquirida por el deudor de la libranza, cuando con ocasión de sus propias acciones u omisiones y sin justificación, haya dado lugar a su incumplimiento.

El texto del referido precepto debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 1571 del Código Civil en relación con la solidaridad pasiva: “El acreedor **podrá dirigirse** contra todos los deudores solidarios conjuntamente, **o contra cualquiera de ellos a su arbitrio**, sin que por este pueda oponérsele el beneficio de división” (se destaca). A través del análisis de los términos establecidos en la citada disposición es dable inferir que la aplicación de esta figura es potestativa y en esa medida, no estamos en presencia de una norma de carácter imperativo.

Lo expuesto se confirma en el texto del artículo 1573 del mismo código, en donde se reconoce al acreedor el derecho a renunciar a la solidaridad que obre en su favor en el siguiente sentido: “El acreedor **puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad** respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos” (se resalta).

Por último, en cuanto a su inquietud respecto del alcance de “orden público” de determinadas disposiciones, debemos recordar que tal y como lo señala el artículo 16 del Código Civil, el mismo se predica de aquellas normas en cuya observancia estén interesados el “orden y las buenas

costumbres”, las cuales no podrán desconocerse por convenios particulares. En punto a este aspecto cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia ha señalado en su jurisprudencia lo siguiente:

Las leyes de orden público, según el concepto de Beudant, son las que **tienden a asegurar la organización que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y tienen como característica predominante que interesan más a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspiran más en el interés general que en el de los individuos**. No es cosa siempre fácil distinguir dentro de la legislación civil las normas que pertenecen al orden público y las que gobiernan intereses estrictamente privados, porque no existe antagonismo entre el interés general y el privado. Lejos de toda generalización absoluta, debe entenderse con preferencia el fundamento y fin de cada norma para determinar su verdadero carácter **según se dirija y destine directa e indirectamente al beneficio de un particular o a beneficiar en primer término a la comunidad**. De esta manera aparece muy calificado el carácter de orden público que corresponde a las leyes de derecho privado que rigen, por ejemplo, el estado y capacidad de las personas, base de la organización social; las que gobiernan la propiedad, especialmente la agraria, porque conforman económicamente el Estado; las que adoptan medidas de resguardo y amparo de los derechos de terceros, en virtud de que todo derecho que no es el personal de las partes debe confundirse para ellas con el interés general que no pueden menoscabar, y las leyes inmediatamente vinculadas a las buenas costumbres, cuyo concepto se engloba dentro del orden público (Sala de Casación Civil, junio 27 de 1940). (Negrilla fuera de texto).

(...).»